CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2016

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
5.ª SESIÓN ORDINARIA

MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 2016
PRESIDENCIA DE MIGUEL ÁNGEL TORRES MORALES

-A las 09:44 h, se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas.

Siendo las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos, del martes 11 de octubre en el Hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas Yonhy Lescano Ancieta, Marisa Glave Remy, Miguel Castro, Alberto Quintanilla, Vicente Zeballos, Miguel Torres, Mario José Canzio, Liliana Takayama, Lourdes Alcorta, Luis Fernando Galarreta; con la licencia de los señores Marisol Espinoza Cruz, Ángel Velásquez Quesquén, y la dispensa de la congresista María Úrsula Ingrid Letona Pereyra.

El *quorum* para la presente sesión es de nueve congresistas.

Con el *quorum* correspondiente, se inicia **la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución** y Reglamento, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2016-2017.

Se somete a consideración de la comisión, el Acta correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, de fecha 20 de setiembre de 2016. Si no hay intervenciones, se procede a votar.

Al voto el Acta del 20 de setiembre de 2016.

Sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo.

Aprobado por unanimidad.

Pasamos a la estación de despacho.

Despacho

El señor PRESIDENTE.— Se ha remitido a los despachos y se encuentran en sus carpetas, los siguientes cuadros: Cuadro de Documentos Recibidos del 16 de setiembre al 6 de octubre del 2016; en dicha relación puede apreciar la suma de los documentos ingresados en dicho periodo.

Pueden solicitar copia del documento de su interés, a la secretaria técnica.

Cuadro de Documentos Emitidos el 16 de setiembre al 6 de octubre del 2016.

Asimismo, damos cuenta de los documentos emitidos por la comisión durante el citado periodo, de acuerdo al cuadro adjunto.

Cuadro de Proyectos de Ley Ingresados del 16 de setiembre al 6 de octubre de 2016.

En la última semana ingresaron diecisiete proyectos de ley, de acuerdo al cuadro que podrán encontrar en sus carpetas.

Se ha procedido a solicitar las correspondientes opiniones a las entidades o especialistas vinculados.

Acá quiero hacerles la precisión, y estamos tratando de agrupar porque ya estamos casi con 80 proyectos de ley dentro de esta comisión, y hay muchos que se están duplicando, triplicando, estamos tratando de agruparlos por tema.

2.4. Cuatro de Tratados Ejecutivos, ingresado el 16 de setiembre al 6 de Octubre al 2016.

Han ingresado cuatro Tratados Ejecutivos, los mismos que ya han sido derivados al grupo de trabajo, encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia, y tratados internacionales ejecutivos para su estudio.

Cuadro de Decretos Supremos ingresado el 16 de setiembre al 6 de octubre de 2016.

Damos cuenta que el Poder Ejecutivo, comunica de expedición de siete decretos supremos declarando o prorrogando el estado de emergencia en diversas provincias del país, se trata de los siguientes decretos supremos: 058, 062, 64, 65, 66, 68 y 69, estas normas pasan al equipo de asesoría de la comisión, para su estudio y evaluación.

2.6 Cuadro de Decreto de Urgencia ingresado el 16 de setiembre al 6 de octubre del 2016.

Por último, han ingresado para su respectivo control posterior el Decreto de Urgencia 001-2016, por el que se dictan medidas urgentes y excepcionales en materia económica y financiera destinados a recuperar la capacidad operativa y la continuidad de los servicios de salud por parte del sector Salud, el cual han sido remitidos al grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo para su correspondiente evaluación y dictamen.

Pasamos a la estación de informes.

Informes

El señor PRESIDENTE.— La presidencia cumple con informar que hemos recibido oficio, en donde la Oficialía Mayor nos traslada el acuerdo de modificación del cuadro de comisiones tomado por el Pleno del Congreso de la República, el 21 de setiembre último, aprobando la salida de la congresista Yeny Vilcatoma de la Cruz, y el ingreso de la congresista Rosa María Bartra Barriga, como miembro titular de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Asimismo, ingresan en calidad de accesitarios, los señores congresistas: Marco Arana Zegarra, Luis Galarreta Velarde y Sonia Rosario Echevarría Huamán, a quienes les damos la bienvenida.

El día domingo 9 de octubre, señores congresistas, se les informa que fue publicada la Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú, tras ocho días de espera, es la primera ley de la Comisión de Constitución en este nuevo periodo parlamentario.

El día 6 de octubre, se les informa a los congresistas que acompañamos a Transparencia en la presentación del Plan 32, Reformas para la Democracia, donde se presentaron 32 reformas institucionales como aporte de la asociación civil.

Por último, les informo que el próximo lunes 17 de octubre a las tres de la tarde, realizaremos una sesión conjunta, y les pido, por favor, tomen nota para sus agendas.

Lunes 17 de octubre, a las tres de la tarde, vamos a realizar una sesión conjunta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de recibir el Décimo Noveno Informe Anual de la Defensoría del Pueblo por parte del defensor del pueblo Walter Gutiérrez Camacho, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 162.º de la Constitución Política, y 94.º del Reglamento del Congreso, por lo que les pido que lo programen en sus agendas.

Vuelvo a repetir, lunes 17 de octubre a las tres de la tarde.

Hemos preferido hacer una sesión extraordinaria para no dilatar los temas de la comisión.

Se da la bienvenida al congresista Gilmer Trujillo.

Si algún señor congresista desea presentar un informe.

Pasamos a la sección de pedidos.

Pedidos

El señor PRESIDENTE.— Teniendo en cuenta que la semana pasada se aprobó ampliar el número de integrantes del grupo de trabajo Reforma Electoral, quisiera saber si es que existe alguna propuesta para la conformación de nuevos integrantes en el grupo de trabajo de la reforma electoral.

Congresista Marisa Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Gracias, Presidente.

Me gustaría proponer al congresista Alberto Quintanilla.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, Presidente; para saludar a todos los miembros.

A la congresista Rosa Bartra, no quiero entrar en temas que no me corresponde, pero a través suyo, Presidente, entendí que el congresista Marco Arana iba a estar como miembro de ese subgrupo, pero lo dejo para que no vaya a decirse que como vocero no hizo las coordinaciones con el congresista Marco Arana, yo sabía que el congresista Arana por eso se había puesto de accesitario, porque era principal, pero es un tema que se lo

dejo a su bancada, pero dejo sentada por sea caso la conversación que tuve.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Puedo llamar al congresista Arana, pero entiendo que nuestro acuerdo era que era el congresista Quintanilla, que es titular; pero sí queda claro que es un congresista del Frente Amplio quien pudiera incorporarse en la comisión, entendemos nosotros que es el congresista Quintanilla, pero haremos la correspondiente revisión en la bancada para tener claro el tema, pero entendemos nosotros que el titular es el congresista Quintanilla.

El señor PRESIDENTE.— En todo caso la jefa del grupo de trabajo, les informo que de manera informal, el día de ayer me comentó que el grupo de trabajo desea pasar de tres a siete integrantes, el día de ayer justo me comentaba, y que serían dos participantes de Fuerza Popular; uno, de Frente Amplio; uno, de APP; uno, de PPK; uno, de Acción Popular; uno, del APRA y con eso se formarían los siete.

Entonces, teniendo en cuenta que todavía no está definido claramente quiénes son en el Frente Amplio, propongo que dejemos un espacio pendiente para que ellos lo definan; pero en todo caso podríamos proceder a aprobar la participación primero de la congresista Rosa Bartra, también de parte Fuerza Popular, y los otros dos no me termina de quedar claro quiénes podrían ser del grupo aprista y del grupo de Acción Popular.

¿Alguien que desea presentar alguna propuesta al respecto?

Congresista Yonhy Lescano, se ha propuesto para formar parte del grupo de trabajo de Reforma Electoral, se le agradece; nos quedaría pendiente del Partido Aprista.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Señor Presidente.

Como una cuestión de orden, en todo caso hoy día aprobemos la ampliación del número de miembros a siete, y usted como presidente oficie a cada bancada y que ellos propongan y lo ratificamos la próxima semana.

El señor PRESIDENTE.— Correcto.

Quiero aprovechar la semana también para hacer una consulta.

Si es que los accesitarios pueden formar parte o no de los grupos de trabajo.

Entonces, atendiendo a la cuestión previa del congresista Zeballos, pasemos a la votación de pasar de tres a siete miembros el grupo de trabajo de Reforma Electoral, donde dos posiciones serán ocupadas por integrantes de Fuerza Popular; uno, por APP; otro, por PPK; otro, por el Grupo Parlamentario; otro, por Frente Amplio; y otro, por Acción Popular.

Los que están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

Ha sido aprobado por unanimidad.

Entonces, pasa de tres a siete en la conformación que hemos mencionado.

Cada uno de los grupos parlamentarios, deberá designar específicamente quiénes son los miembros de dicho grupo de trabajo, debiendo ser titulares los mismos.

Pasamos, entonces, a la estación de...

Disculpen, hay otro pedido adicional.

Se solicita la incorporación del doctor Aníbal Quiroga, para que forme parte dentro el Comité Consultivo de esta comisión.

Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Congresista Glave.

Los que se abstengan. Los que estén en contra.

Aprobado por mayoría.

Pasamos a la Orden del día.

Orden del Día.

Sí, congresista.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Muy breve, Presidente; un pedido.

El Poder Ejecutivo, presentó una autógrafa observada recaído en el Proyecto de Ley 3320, o los proyectos de ley 4284, 4490, 4850 y 4952-2015 relacionados a la Ley de Partidos sobre financiamiento público.

Entonces, solamente quería hacer referencia para ver si podemos como comisión abocarnos a esta observación, para ver si es que vamos a allanarnos, insistir, o replantearlo, para que se pueda ir viendo y agendar este tema, creo que es importante dentro de los temas de la comisión.

El señor PRESIDENTE.— Sí, me informan que ha llegado a la comisión, entonces lo estaremos agendando para debatirlo la siguiente sesión.

Pasamos a la Orden del Día.

Orden del Día.

El señor PRESIDENTE.— Propuesta de dictamen de inhibición, recaído en el Proyecto de Ley 158-2016, Ley que permite el otorgamiento de pensión de gracia de los bomberos que sufren invalidez permanente.

Conforme a lo acordado por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de fecha 13 de setiembre del 2016, respecto a devolver el Proyecto de Ley 58-2016 presentado por el grupo parlamentario Frente Amplio, por Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Justiniano Apaza, mediante el cual propone que los miembros activos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que hayan sufrido invalidez permanente puedan acceder a una pensión de gracia, se presente el predictamen de inhibición respectivo para su aprobación final.

Si bien consideramos que por el fin que percibe la propuesta merece el estudio y debate respectivo, toda vez que nuestros valerosos bomberos son personas que con vocación de servicio y amor al prójimo exponen sus propias vidas para proteger las nuestras, en caso no solo de incendio, sino de accidente de tránsito, emergencias médicas y desastres naturales, entre otros, y que sin duda merecen el reconocimiento del Estado y de la sociedad, también es importante señalar que el artículo 77.º del Reglamento del Congreso, establece que en la remisión de las propuestas de ley a comisiones se aplica el criterio de especialización, por lo que ellos, sumado a que esta importante iniciativa ya sido enviada a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas como comisión principal, y en aplicación del literal c) del artículo 77.º del Reglamento del Congreso, se ha elaborado el dictamen de inhibición por no corresponder a la competencia, materias, ni temáticas de esta comisión.

En consecuencia, siendo un tema muy claro, solicito a ustedes, señores congresistas, someter a votación el presente predictamen de inhibición del Proyecto de Ley 58-2016.

Se da la bienvenida al congresista Gilbert Violeta, y al congresista Daniel Salaverry.

Para la inhibición, vamos a pasar hacer una votación nominal, salvo que quieran tener alguna intervención.

Congresista Quintanilla.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Buenos días a todos.

Señor Presidente, le pido una explicación. Nos inhibimos para que vaya a la Comisión de Defensa para viabilizar o interpretar el Reglamento.

El señor PRESIDENTE.— Le explico.

En la tercera sesión, nosotros vimos dos proyectos de ley que al menos no correspondían que hayan sido derivados acá a Constitución, el tema de los bomberos y el tema de delimitación o de la demarcación de una provincia, entonces procedimos a devolverlos, pero nos han dicho en Oficialía que no existe ese procedimiento de devolución, entonces hemos tenido que hacer un dictamen diciendo que nos inhibimos, que no nos pronunciamos porque no es nuestra especialidad; eso no implica que se vaya dejar de ver el proyecto, se está viendo en la comisión correspondiente.

Procedemos, entonces, a la votación nominal.

Congresista Marisa Glave, a favor.

congresista Yonhy Lescano, necesito que se acerque al micrófono, congresista. Disculpa la molestia.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— A favor, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias.

Congresista Quintanilla, a favor; congresista Zeballos, a favor; congresista Gilbert Violeta, a favor; congresista Miguel Castro,

a favor; congresista Gilmer Trujillo, a favor; que conste Miguel Ángel Torres, a favor; congresista Canzio, a favor; congresista Liliana Takayama, a favor; congresista Rosa Bartra, a favor; bienvenida, congresista; congresista Galarreta, a favor; congresista Salaverry, a favor.

Ha sido aprobado por unanimidad.

Propuesta de dictamen de inhibición recaído en el **(2)** Proyecto de Ley 188-2016, por el que se propone declarar de necesidad y utilidad pública la creación de la provincia de Yarush, en el departamento de Pasco, conforme a lo acordado por unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de fecha 20 de setiembre de 2016, respecto a devolver el Proyecto de Ley 188 presentado por el grupo parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Roy Ventura presentamos dictamen de inhibición.

La propuesta de Ley busca se declare de necesidad y utilidad pública la creación de la provincia de Yarush, para constituirse como la cuarta provincia de la región de Pasco, tomando como superficie la conformada actualmente por los distritos de Tíclacayán, San Francisco de Asís de Yaruscayán, Huariaca y Pallanchacra; y considerando que esta iniciativa ya ha sido enviada a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado como comisión principal.

En aplicación del artículo 70.º, que establece que para la remisión de la propuesta de ley a comisiones se aplica el criterio de especialización, y el 77.º literal c) del Reglamento del Congreso, se ha elaborado el predictamen de inhibición debido a que la propuesta no corresponde las competencias materiales ni temáticas de esta comisión.

En consecuencia, solicito a ustedes, señores congresistas, que sin mayor debate se someta a la votación el presente predictamen nuevamente de inhibición del Proyecto de Ley 188-2016.

Si no existiera otra opinión...

Congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Yo me atrevería a sugerirle que en el documento de inhibición que usted traslade, ponga la siguiente observación: Por práctica parlamentaria, toda la materia de demarcación es exclusiva de la Comisión de Descentralización, a no ser que hubiera una cuestión de constitucionalidad.

A ese respecto, yo indicaría que en el oficio que van a devolverlo ponga esta observación.

El señor PRESIDENTE.— Pero de hecho se ha enviado a Descentralización, ¿no? O sea, lo han remitido tanto a Descentralización como a Constitución.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— No, yo me refería a que por práctica parlamentaria, todo proyecto de ley o iniciativa de demarcación, necesariamente lo ve Descentralización,

prácticamente a exclusividad podríamos decir, a no ser que tuviera algún vicio de constitucionalidad por ahí recién.

Yo lo veo realmente una actitud extraña de Oficialía Mayor o de la Vicepresidencia, quien ha derivado a la Comisión de Constitución resulta bastante extraño, en consecuencia, yo le planteo que haga usted la observación en el documento.

El señor PRESIDENTE.— Se hará la precisión y observación.

Pasamos a votación nominal.

Se da la bienvenida a la congresista Yeni Vilcatoma.

Congresista Yonhy Lescano, a favor; congresista Marisa Glave, a favor; congresista Alberto Quintanilla, a favor; congresista Vicente Zeballos, a favor; congresista Gilbert Violeta, a favor; congresista Miguel Castro, a favor; congresista Gilmer Trujillo, a favor; conste a favor, Miguel Ángel Torres; congresista José Canzio, a favor; congresista Rosa María Bartra, a favor; congresista Liliana Takayama, a favor; congresista Luis Fernando Galarreta, a favor; congresista Daniel Salaverry, a favor.

Ha sido aprobado por unanimidad.

El día de ayer el congresista Wuilian Monterola, ha remitido oficio solicitando la reprogramación de fecha de su sustentación, entonces lo estaremos agendando en las próximas sesiones.

Pasamos, entonces, al punto 5.4.

Sustentación de la congresista Marisa Glave Remy, del Proyecto de Ley 262-2016 de su autoría, que propone la Ley de Reforma Constitucional incorporando el artículo 12 A a la Constitución Política del Estado sobre el derecho al agua.

El Proyecto de Ley 262, plantea una ley de reforma constitucional a través de la cual se incorpore el artículo 12 A a la Constitución, reconociendo el derecho de agua.

Como ustedes sabrán, señores congresistas, ya hemos tenido la participación de algunos autores del proyecto de ley referido a esta materia, por lo cual se ha considerado conveniente solicitar la presentación a la congresista Glave.

En ese sentido, dejamos en uso de la palabra a la congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera empezar señalando que me alegra saber que existen congresistas de distintas bancadas que plantean, precisamente, la constitucionalización del derecho al agua.

Está como usted ha señalado, congresista, el proyecto de la congresista Marisol Espinoza, con quien pude comunicarme el día de ayer para ver si es que pudiéramos, en el marco del debate que se tenga aquí en la Comisión de Constitución, buscar una redacción común de una propuesta.

Y también está el proyecto del congresista Monterola, con quien no he podido comunicarme, pero que he revisado tanto su exposición de motivos, como también la redacción que plantea; y

creo que, tanto en el caso de la congresista Espinoza, como del congresista Monterola, y en mi caso hay algunos elementos en común que podrían ayudarnos a avanzar en este debate, señor Presidente.

En primer lugar, sería importante que la comisión tuviera absolutamente claro que el agua es esencial para la vida, y que se vuelve un recurso necesario para el desarrollo de otros derechos humanos y derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución; no es posible, señor Presidente, hablar de derecho a la salud, ni siquiera hablar de derecho a la alimentación si es que no incluimos el derecho al agua y el derecho al acceso al agua.

Nuestro propio marco normativo reconoce la vigencia de tratados internacionales, Naciones Unidas en varias reuniones, y además hay varias declaraciones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, que han señalado la importancia de reconocer el derecho al agua de las poblaciones en el mundo entero, se plantea en la necesidad de reconocerlo alrededor de las personas adultas mayores, alrededor de las mujeres, alrededor de los niños y de las niñas, en distintas declaraciones.

Nuestro propio Tribunal, el Tribunal Constitucional, en más de una oportunidad, en particular, por ejemplo, en el año 2007 sobre el Expediente 06534-2006, señala claramente, señor Presidente, que el agua potable constituye un elemento indispensable para la vida y para la salud de la persona, por lo que su provisión constituye una condición mínima de la existencia; tal condición mínima, se debe a que ella se provee en el elemento insustituible, indispensable y básico para la ingesta de líquidos, la preparación de alimentos, y para el aseo, aspectos estos que forman lo que puede denominarse como elementos básicos para el goce de un mínimo de salud.

En esa misma sentencia, señor Presidente, el Tribunal Constitucional señala: El impedimento del goce de este elemento no solo incide en la vida y en la salud de la persona, sino que lo hace en su propio derecho a la dignidad, existen determinados bienes, señor Presidente, dice el Tribunal, cuya imposibilidad de acceso pueden resultar absolutamente incompatibles con las condiciones mínimas e indispensables en las que ella se debe estar, se trata de condiciones cuya ausencia atentarían y negarían radicalmente la condición digna de la persona.

Asimismo, en la misma sentencia, el Tribunal señala: El agua como recurso natural no solo contribuye ya directamente a la consolidación de los derechos fundamentales en mención, sino que desde una perspectiva extrapersonal incide sobre el desarrollo social y económico del país a través de políticas de Estado emprendidas en una serie de sectores, tal es el caso de Agricultura, Minería, Transporte, Industria.

Es decir, nuestro propio órgano constitucional, señala el Tribunal, que es fundamental reconocer el derecho al agua tanto para el acceso a derechos fundamentales como a la salud, como a la alimentación, o como a la dignidad de la persona, sino que

reconoce además que este recurso es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país.

Nosotros, señor Presidente, tenemos adicionalmente políticas de Estado, la política de Estado n.º 3 en el marco del Acuerdo Nacional, en lo que se refiere al acceso universal de los servicios de salud y seguridad social, señala ya, por ejemplo, que es fundamental para lograr el acceso universal a la salud ampliar el acceso al agua potable.

Lo mismo se señala en la política n.º 21 del Acuerdo Nacional, sobre el tema de desarrollo, infraestructura y vivienda, donde se hace también especial hincapié en la necesidad de garantizar el saneamiento.

Hace poco, señor Presidente, hemos aprobado en el marco del Acuerdo Nacional, toda las fuerzas políticas que tenían representación en el Congreso junto con los principales gremios y organizaciones de la sociedad civil por consenso, la política 33 referida a recursos hídricos, señor Presidente; y señalamos en el marco de esta política 33, que nos comprometemos a cuidar el agua como patrimonio de la nación y como derecho fundamental de la persona humana al acceso al agua potable, imprescindible para la vida y para el desarrollo humano de las actuales y de las futuras generaciones.

Se debe usar el agua en armonía con el bien común como un recurso natural renovable y vulnerable, e integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales. Ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad del agua, el Estado establece los derechos y condiciones de su uso y promueve la inversión para su gestión eficiente.

De igual manera, velaremos por la articulación de las políticas en materia de agua, con las políticas territoriales de conservación y de aprovechamiento eficiente de los recursos naturales a escala nacional, regional, local y de cuencas.

Asimismo, promoveremos la construcción de una cultura del agua basada en los principios y objetivos aquí contenidos, que leen la consciencia ciudadana en torno a la problemática del cambio climático y haga más eficaz y eficiente la gestión del Estado; contribuiremos también a establecer sistemas de gobernabilidad del agua que permitan la participación informada, efectiva y articulada de los actores que intervienen sobre los recursos hídricos, señor Presidente.

La constitucionalización del derecho al agua, señor Presidente, viene ocurriendo ya en la región, está en la Constitución de Bolivia, está en la Constitución de Ecuador, está también en la Constitución de Colombia, reconocida también como un derecho constitucional.

Y además, nuevamente el propio Tribunal Constitucional señala al final, amparándose en el artículo 3.º y en la Cuarta Disposición Final de nuestro texto constitucional que, en el caso específico del derecho al agua potable, este colegiado considera que aunque dicho tributo no es encuentra considerado a nivel positivo,

existe, no obstante, una serie de razones que justifican su consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamental, dice el TC; asumir dicha premisa, supone perfilar su individualización dentro del contexto que ofrecen algunas de las perspectivas anteriormente enunciadas.

A tales efectos, atendiendo a que no existe norma expresa que contenga dicho reconocimiento a nivel interno, y a que a nivel internacional aun se encuentran pendientes desarrollos en muchos ámbitos comprendidos a sus atributos, puede acudirse, primeramente, a la opción valorativa o principista y a la cláusula de los derechos implícitos que se le permite servir de referencia.

Así las cosas, la utilización de la fórmula de individualización, permitiría legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no enumerado, su reconocimiento se encontraría ligado directamente a valores tan importantes como la dignidad del ser humano y el estado social y democrático de derechos, señor Presidente.

Estas son consideraciones del Tribunal Constitucional, de tratados de los cuales nosotros formamos parte de políticas de Estado que nosotros hemos asumido, señor presidente.

Dentro de lo que se ha presentado en la comisión, hay algunos elementos que me parece importante destacar.

Tanto en la propuesta de la congresista Espinoza, se reconoce el agua como un derecho humano, cosa en la cual nosotros también estamos de acuerdo y podríamos hacer un fraseo que reconozca expresamente su reconocimiento como derecho humano.

En el caso del congresista Monterola, también plantea el tema de que hay que tener un acceso universal y progresivo, lo mismo planteamos en la propuesta nuestra, que el acceso debe ser universal y debe ser progresivo; y señalamos, además, que debe ser el Estado quien tiene la obligación de garantizar su acceso y que este acceso debe ser aun agua potable, que sea salubre, señor Presidente, que sea accesible, que sea suficiente; es decir, que esté en las cantidades necesarias y en la cantidad necesaria para que se permita el desarrollo pleno de los seres humanos de las poblaciones de nuestro país.

El congresista de Fuerza Popular, también ha señalado que es fundamental señalar que hay que priorizar el consumo humano de agua frente a cualquier otro uso. Lo mismo estamos señalando también, señor Presidente, que es fundamental, además, que sea una prioridad el abastecimiento y la accesibilidad del agua para el consumo humano de todas las poblaciones del país.

Hay algunos elementos adicionales que creemos es importante señalar. En primer lugar, que es un bien público, que es un bien público social y cultural y sin fines de lucro, señor Presidente. Y esto tiene mucha relación a lo que también plantea la congresista Espinoza, quién señala que el agua debiera ser considerada patrimonio del país y bien estratégico de la nación, en tanto es indispensable para la vida humana como también para el desarrollo económico de nuestro país.

Estamos planteando, finalmente, señor, Presidente, que el Estado debiera plantear y debiera tenerse que la gestión del agua, debe hacerse también de manera participativa en cada una de las instancias ya que es un recurso precisamente que beneficia a la población en su conjunto, y atraviesa distintos espacios de nuestra vida y de nuestra economía también.

Esos son elementos que están presentes, tanto en la Exposición de Motivos, como en conversaciones que hemos tenido con distintos gremios y organizaciones como Sutesal o como Fentap, que son organizaciones que defienden el derecho al agua.

Como le he comentado, señor Presidente, he podido conversar el día de ayer con la congresista Marisol Espinoza, hemos planteado una posibilidad de una redacción alternativa, y podríamos conversarlo también con el otro congresista para poder buscar una redacción común.

Solamente quisiera terminar, señor Presidente, esta primera exposición, y luego contestar las preguntas que sean necesarias, señalando que este proyecto, señor Presidente, en realidad, recoge el Proyecto de Ley 566-2011, proyecto de ley que fue presentado por Javier Diez Canseco en este Congreso, congresista de la República, que creo que para muchos de nosotros ha servido y sirve de fuente de inspiración y creo merece un reconocimiento de parte de este Congreso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA.— Gracias, congresista Glave.

¿Algún congresista desea el uso de la palabra?

De hecho hay bastantes coincidencias en los distintos proyectos de ley que han estado presentando los congresistas en este tema...

Sí, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, dado que este es, incluso, un acuerdo ya adoptado a nivel mundial por Naciones Unidas, y con el voto de nuestro país desde hace algunos años. **(3)** Creo que el establecer un elemento de carácter constitucional como derecho fundamental de acceso al agua deviene en un imperativo; sin embargo, la característica de las algunas de las posiciones que se han planteado a mí por lo menos me llevan a alguna interrogante, cuando se señala, por ejemplo, que no debe ser objeto de lucro. Ahí tenemos que ser bastante claros en determinar que si no debe ser objeto de lucro tampoco entonces, debería cobrarse por sus servicios. O sea, si la educación es un servicio y el Estado está obligado a dar educación gratuita; si la salud es un derecho y el Estado está obligado a dar salud gratuita, ¿el Estado está obligado a dar agua gratuita también? Porque el Estado cobra por el agua, y si usted no paga el agua no le dan agua. En el fondo se convierte en una mercancía.

Aquí en Lima no paga el agua un mes, ya le cortaron el agua, y para que usted pueda volver a tener agua tiene que además pagar el mes completo y encima una multa por no haber pagado.

Entonces, ya no es tan claro el hecho de que el acceso al agua es un acceso irrestricto, sino se ha convertido en una mercancía. ¿Cómo hacemos con ese tema?

El señor PRESIDENTE.— Congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Perdón, presidente, para contestarle a través suyo al congresista Mulder.

En ningún momento se señala que deba ser gratuito, señor presidente, lo que señala es que debe ser sin fines de lucro. Lo que se está planteando, entonces, es que el cobro debe ser precisamente por la operación y por el acceso al servicio más no buscar una rentabilidad adicional por el acceso al servicio al agua.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Totalmente de acuerdo; sin embargo, Sedapal sí tiene fines de lucro, y es más, la presión que tiene permanentemente Sedapal para subir las tarifas, y esa es una discusión que tienen ellos con Sunass es presión que proviene incluso de los trabajadores de Sedapal para obtener las ganancias que corresponde y que le puedan permitir a ellos mejores accesos de trabajo también.

Entonces, vamos a tener que buscar un mecanismo que establezca que si se trata de un derecho sustantivo ese derecho debe llevar al Estado a que su cobro sea un cobro simplemente de cubrir costos y no un cobro que genere la utilidad que les genera, porque sí tiene fines de lucro Sedapal, y cualquiera de las empresas estatales que está manejando el agua tiene fines de lucro y habría entonces que... porque son entidades públicas de derecho privado, y por lo tanto habría que hacer modificaciones en eso.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Glave.

La señora GLAVE REMY (FA).— Sí, señor presidente. Sedapal no tiene lucro en el sentido de generar ganancias que luego permitan que esto se quede en el "propietario". Entiendo que los costos de operación incluyen, precisamente los salarios dignos. No se está planteando que haya una explotación del recurso para generar utilidades que después puedan servir a un propietario. Lo que se está planteando es que evidentemente el cobro del servicio es parte de los costos de la operación y nosotros reivindicamos dentro de la propia Constitución los derechos laborales y por tanto las condiciones mínimas de trabajo.

No se está planteando al señalar que sea sin lucro el hecho de que no se pague justamente a los trabajadores ni que se tenga empresas eficientes que permitan que este servicio y que el acceso al agua sea garantizado. Lo que se está planteando es que no se convierta precisamente en una mercancía con la cual se busque lucrar luego, señor presidente, y que podamos nosotros, por ejemplo, en el marco de esto entregarle alguna empresa privada la posibilidad de explotar el agua para un lucro y no solamente para que se logre garantizar el acceso al servicio.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Acá yo voy, presidente, es que la estructura empresarial sea pública o privada genera lucro, y en el caso de Sedapal sí es una empresa que genera lucro. Ahora que el lucro no lo puedan distribuir entre sus accionistas como hacen las empresas privadas, eso es obvio, porque es una empresa estatal, pero al ser una empresa estatal, presidente, el lucro que se genera es un lucro que se reinvierte y parte de esa reinversión es el justo reclamo de los trabajadores también, como es lógico, porque es el trabajo que ellos están haciendo de compartir las partes de esa ganancia. Eso ha sucedido y está en los reclamos que ellos le corresponden como un derecho inalienable.

Entonces, yo lo que digo es que si establecemos un mecanismo en el que prohibimos específicamente el lucro puede perjudicar a los trabajadores de las empresas públicas que se dedican a este tema. Entonces, simplemente hay que buscar la fórmula para que esto no ocurra, nada más.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Lescano.

El señor LESCANO ANCIETA (AP).— Presidente, nosotros ya hemos sustentado nuestro proyecto de ley de acción Popular, que creo que ha sido el primer proyecto que ha ingresado al Parlamento para que el acceso al agua potable sea un derecho fundamental de la persona. Y si usted lo pone en el artículo 2.º el acceso al agua como derecho fundamental. Es un derecho fundamental.

Ya el desarrollo de ese inciso en una ley ya dirá cómo se tiene que cobrar si es una mercancía no es una mercancía. No podrá decir que una mercancía porque ya está considerado en la Constitución como derecho fundamental, y ese es el artículo principal. Si es derecho fundamental el acceso el agua tiene una serie de condicionamientos; uno de ellos es que uno no se puede hacer millonario dando el servicio de agua potable, ¿por qué? Porque es un derecho fundamental, no puede utilizarle como negocio; no como mercancía, sino que tiene que darlo en las condiciones que la ley de desarrollo constitucional lo tiene que decir.

Yo entiendo, presidente, que como en las demás Constituciones dice "toda persona tiene derecho —no sé en qué inciso— al acceso al agua potable como derecho fundamental". Y eso ya no es mercancía, es derecho de las personas. Como debía ser la educación en el Perú. La educación es un derecho, pero cobran lo que les da la gana, como si fuese mercancía, y es un derecho. Y por eso estamos planteando también que el derecho a la educación sea un derecho sin fines lucrativos, porque ahora es una mercancía, es un negocio; y en todos los países del mundo están viendo una reforma en ese sentido.

Entonces, presidente, aquí la discusión es sobre la norma gruesa. Que se ponga en el artículo 2.º de la Constitución que el acceso al agua potable es un derecho fundamental y después veremos cómo se tiene que ejercer ese derecho fundamental. Entonces, uno de esas condicionantes que dirá la ley de desarrollo constitucional no es mercancía, es un derecho y que tiene que ser prestado en las condiciones que la ley de

desarrollo constitucional lo tiene que decir. No vamos a poder hacer un artículo así grandazo en un inciso, pero que diga un poco reglamentarista ya, el acceso al agua es un derecho humano, y de ahí comienza la ley que se puede expedir después como desarrollo de ese inciso, presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Solamente para comentarle lo siguiente. Estoy coordinando con el equipo técnico de que en vista que hay tantos proyectos de ley sobre la materia, tratemos de acelerar un poco la realización de su dictamen. De hecho vamos a esperar una semana más para los congresistas Monterola y Espinoza para que puedan hacer su exposición de motivos. Yo les pido además consideración porque el congresista Monterola ha sido puesto en espera en tres oportunidades. Y una vez que tengamos esa exposición junto con las opiniones que vence por cierto este próximo martes que enviemos al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Agricultura y a la Sunass, el siguiente martes deberíamos estarlo pasando a dictaminar.

Siguiente punto de agenda. Es la sustentación de la congresista Marisol Espinoza. Entendemos que la congresista ha presentado una licencia, por lo cual se le pedirá la sustentación para la siguiente sesión.

5.6 Propuesta de dictamen recaído en los proyectos de ley 54-2016, 70-2016 y 90-2016 de reforma constitucional que crea la Procuraduría General de la República.

Los proyectos de ley 54, del grupo parlamentario Fuerza Popular; 70, del grupo parlamentario Alianza para el Progreso, y 90 de la célula parlamentaria aprista, propone se realice reforma constitucional para crear la procuraduría General de la República.

Actualmente los procuradores públicos tienen como función principal representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que específicamente les asigne el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

La Constitución Política refiere en su artículo 47.° que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. Sobre la base de este enunciado constitucional se puede apreciar que el Poder constituyente quiso destacar la importancia de la defensa de los intereses del Estado, disponiendo que tal tarea sea realizada por parte de los procuradores públicos sin ahondar en la naturaleza jurídica, cualidades y demás atributos de estos agentes quienes se encuentran a cargo de defensa, dejando su regulación a la ley.

Sobre la base de ello, normas legales de la materia, como lo son el Decreto Legislativo 1068 del sistema de Defensa Jurídica del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades evidencia que son los titulares de

las entidades públicas en los distintos niveles de gobiernos quienes terminan designando o proponiendo a los procuradores públicos sin previo concurso público de méritos. Asimismo, estos dependen administrativamente de las entidades cuyos intereses defienden jurídicamente a nombre del Estado.

Además existe control expreso por parte del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, presidido por el Ministerio de Justicia para el ejercicio de sus funciones. A ello se suma el hecho de que el cargo de procurador público es de confianza, pudiéndose ser en sus funciones por el simple término de su designación.

En este contexto no se puede desconocer que existe consenso respecto a la necesidad de que los procuradores públicos cuenten con independencia y autonomía para cumplir con su deber constitucional, la defensa de los intereses del Estado. Y ello pasa necesariamente por dotarlo de independencia respecto de los titulares de las entidades, de tal forma que sean defensores de un interés superior como es el Estado y no así de los gobiernos y funcionarios de turno.

Dicha independencia y autonomía no solo se debe circunscribir al funcionamiento del desarrollo de las labores, sino también desde el propio momento de la designación, es decir, se debe procurar la despolitización de la designación de su titular, por tal motivo en el predictamen se propone que sea el Consejo Nacional de la Magistratura el que designe a dicho procurador general.

Se opta por el Consejo Nacional de la Magistratura no solo porque se trata de un órgano constitucional autónomo apolítico a diferencia del Congreso de la República y sobre todo porque el procurador general al ejercer la defensa jurídica del Estado requiere necesariamente contar con un organismo especializado en la selección y nombramiento de funcionarios que cuenten con cualidades y capacidades jurídicas.

Además dado que se requiere que el titular cuente no solo con las credenciales democráticas y morales necesarias para el cargo se requiere también de una autoridad altamente capacitada. De ahí que se plantea que la elección que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura sea previo concurso público de méritos, lo que permitirá también que la ciudadanía pueda ejercer un control social y coadyuvar con el referido organismo constitucional autónomo en el proceso de selección.

Y es que al haber puesto la constitución política énfasis únicamente en rol de los procuradores públicos de velar por los intereses del Estado, pero dejar librada la ley, la estructura con posición, organización, designación y demás alcances de la figura de los procuradores públicos se ha generado la problemática de diseño normativo estructural y fáctica actual.

Por estos motivos es que se considera necesaria una reforma constitucional, a efectos de dar el marco jurídico constitucional adecuado que refuerce y garantice una verdadera autonomía a uno de los sistemas administrativos más importantes de la gestión pública, cual es el sistema Jurídica del Estado.

En ese sentido, resulta viable la modificación en el artículo 47.º, constitucional y demás artículos relacionados de la carta política a efectos de elevar a la Procuraduría General de la República a nivel de un órgano constitucional autónomo como ente rector del sistema de Defensa Jurídica del Estado con total autonomía e independencia cuyo titular sea el procurador general de la República y dotado de un cuerpo de procuradores públicos donde el criterio de su selección se ampare en la meritocracia, permitiéndose el desarrollo de una línea de carrera y el ejercicio de sus funciones en forma eficaz y eficiente, con independencia funcional, celeridad y probidad, conforme lo regule en su ley orgánica.

Al respecto, es preciso mencionar que con fecha 26 de setiembre de 2016 y luego de efectuada la llamada atención por parte de esta comisión la ministra de Justicia y Derechos Humanos remitió el Oficio 799-2016 de 22 de setiembre de 2016, opinando en sentido favorable a dichas iniciativas legislativas. En el referido documento, como se señala en el predictamen, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera viable que se establezca a la Procuraduría General de la República como un órgano constitucional autónomo.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera que la propuesta más idónea es la que permite que la designación y nombramiento de los procuradores públicos sería realizada conforme con el dispositivo legal que se apruebe para dichos efectos, pudiendo contener un mecanismo de concurso público de méritos conducido por la procuraduría General de la República.

Es en atención a lo expuesto precedentemente y atendiendo la opinión técnica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que el presente dictamen propone lo siguiente:

Incluir en el artículo 39.º de la Constitución Política al procurador general de la República en la lista de altos funcionarios públicos al servicio de la Nación. **(4)**

Modificar el artículo 47.º de la Constitución Política para establecer la autonomía e independencia de la Procuraduría General de la República y que su estructura organizativa se establece por su ley orgánica.

Que la Procuraduría General de la República es el órgano rector del sistema de defensa jurídica del Estado presidido por el procurador general de la República, y que el procurador general de la República es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura previo concurso público de méritos y evaluación personal por siete años, pudiendo ser removido por falta grave por dicho consejo.

Modificar el artículo 99.º de la Constitución Política para establecer que el procurador general de la República es pasible de acusación constitucional y sujetarse por lo tanto a antejuicio y juicio político.

Incorporar en el artículo 154.º el numeral cinco a fin de incluir como función del Consejo Nacional de la Magistratura el nombrar previo concurso público de méritos y evaluación de

personal al procurador general de la República con el voto conforme de los tercios del número legal de sus miembros.

Entonces, señores congresistas, sometemos a debate esta propuesta.

Quisiera señalar que se abre una ronda de intervenciones para lo cual se dará un tiempo de tres minutos a cada congresista, y si lo solicita un minuto adicional.

Congresista Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muy buenos días, señor presidente; y a través de su persona un saludo a todos los señores congresistas.

En efecto, para hacer un breve comentario. Recordar la necesidad urgente de poder dotarle de una autonomía constitucional a los procuradores a nivel nacional, por cuanto en todas las instituciones públicas que se vienen llevando a cabo procesos de selección, concursos, compra de bienes o contratación de servicios nos revela la urgente necesidad de establecer parámetros que doten de autonomía a los procuradores que son quienes van a terminar defendiendo ante los órganos correspondientes, llámese el Ministerio Público como Poder Judicial los intereses del Estado, para poder probar el delito y para poder, luego de probado el delito, plantear el pago de la reparación civil para pagar los daños que se han causado al Estado.

Todos los días recibimos por los medios de comunicación cuestionamientos sobre corrupción. ¿Qué necesitamos? Instituciones fuertes, autónomas, que puedan cumplir su labor a cabalidad; que no tengan que ser sometidos a ningún poder político para que puedan cumplir su función porque ellos representan los intereses del Estado.

Haciendo una lectura de la opinión del Consejo Nacional de la Magistratura este órgano emite una opinión favorable en el sentido de que ellos pueden llevar a cabo este concurso público por cuanto son el único órgano constitucionalmente autónomo destinado para hacer selección y nombramiento de funcionarios; en este caso ya lo viene siendo del Ministerio Público y del Poder Judicial, y de ser aprobada esta propuesta se encargaría también de hacer la selección de los procuradores. Ello también nos lleva la necesidad de prestarle atención a las modificaciones que requiere la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura pues el cambio debe ser en todo el sistema, en todas las instituciones.

Asimismo, resaltar esta opinión pendiente que quedaba del Ministerio de Justicia respecto a la ministra Marisol Pérez Tello que opina favorable hacia la necesidad de contar con un órgano constitucionalmente autónomo, de forma tal que esta institución una vez que pueda contar su ley orgánica de ser aprobada esta propuesta, pueda cumplir sus labores sin estar sujeto a ninguna entidad. Incluso hoy contando con las facultades legislativas el gobierno únicamente ha podido dotar de una mera autonomía a la doctora Julia Príncipe, que es la

encargada en este momento de nombrar a los procuradores; sin embargo, no cuenta con la autonomía administrativa ni económica que sí contaría siendo un órgano constitucionalmente autónomo.

Entonces, estando absueltas ya estas dos consultas por parte del consejo Nacional de la Magistratura que opina favorable respecto a la posibilidad de hacer las evaluaciones y la respuesta del Ministerio de Justicia en relación al nivel de autonomía que opina favorable hace que tenga un órgano constitucionalmente autónomo se ponga a debate y se pueda finalmente decidir cuál va a ser el rumbo que las procuradurías deben tomar siendo que la corrupción es un flagelo que día a día hace que el Estado pierda millones a nivel nacional.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Vilcatoma.

Damos la bienvenida, y disculpen la demora en hacerlo, a las congresistas Karina Beteta y Patricia Donayre.

No habiendo más intervenciones vamos a tener que pasar a la votación. Vamos a hacerlo de manera nominal.

Congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Un comentario, presidente, manifestando mi acuerdo al proyecto de ley que se está presentando.

Es obvio que en el Perú somos así y es nuestra idiosincrasia, quizá en el transcurso de varias otras generaciones a lo mejor dejemos siendo, pero siempre por lo general somos reactivos y este proyecto de ley obedece a una reacción también, el atropello que hubo a fines del gobierno anterior contra las personas que ejercían el cargo de procuradores en cargos bastantes sensibles. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la señora Príncipe Trujillo, que fue destituida por haberse ocupado del tema de las agendas; otro caso fue el de la congresista Vilcatoma entonces también procuradora presionada por el ministro de Justicia de entonces, y eso lleva evidentemente a esta modificación.

Yo creo que el Congreso debe ser bastante puntual, firme y preciso también en lo que se determina como mecanismos de elección cuando se establece que el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano constitucionalmente llamado a ese tipo de esquemas.

Y digo que hay que mantener firmeza en eso porque sin duda habrá una campaña en contra de la determinación que pueda asumir el Congreso en función de los criterios que corresponden a este Consejo Nacional de la Magistratura, porque reactivamente también algún sector vinculado a determinados estudios de abogados que fungen de organizaciones no gubernamentales, pero que son estudios de abogados, establecen ahora el concepto o la palabra cuestionado para decir algo. O sea, una persona no es culpable, no es inocente, es un cuestionado, y nadie sabe quién cuestiona. Ellos mismos cuestionan y pasa uno a la categoría de

cuestionado y resulta que ya no tiene ningún derecho, ninguna atribución, ninguna posibilidad.

Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura actual está cuestionado. ¿Y por qué está cuestionado? Por la conducta de una u otra persona, conductas personales, pero todo el consejo está cuestionado.

Entiendo que los casos que se cuestionaron de dos personas que integraban el Consejo Nacional de la Magistratura, una, cogida infraganti en una fotografía con un juez que estaba postulando en un hotel y la secretaria que estaba al lado que actuaba de intermediaria, fue resuelto con su destitución; el caso de otro que fue elegido por los colegios profesionales que no son los del colegio de abogados y que también se agarró en un audio en el que decía "sí, estamos aquí yo me llevo bien y hago unas placas con la universidad y no sé cuánto", tampoco fue incorporado. De manera que los mecanismos aunque tardíos del Consejo Nacional de la Magistratura para evitar este tipo infiltraciones han determinado por lo menos que ha habido un mecanismo de corrección.

Hay el caso actual de otro miembro del Consejo de la Magistratura que al parecer ha contratado al novio de su hija, ha salido en los periódicos también. Este tipo de cosas son conductas de funcionarios, y para eso existen una serie de normas que establecen los mecanismos de sanción para las conductas de los funcionarios, pero esta es una institución que se elaboró constitucionalmente en función del criterio de que el control sobre la conducta de los jueces es un control ciudadano y por eso es que se establece que en una entidad como el Consejo Nacional de la Magistratura haya personas que no provengan del mundo jurídico, sino que provengan de otros colegios profesionales, y hay unas quejas en el sentido de que "no es posible que una enfermera integre el Consejo Nacional de la magistratura". ¿Y por qué? Es una profesional, solo que es una profesional de la salud, y se busca justamente que haya profesionales que no sean específicamente del derecho para dar una visión mucho más amplia al control ciudadano de quienes determinan quiénes son los jueces de la república. Ese fue el sentido; discutible o no es el que está en la Constitución.

Y creo, presidente, que eso lo que debe llevarnos es a considerar que un organismo constitucionalmente autónomo establecido en función de ese criterio es un organismo que debe merecer nuestra confianza como organismo. Si hay funciones públicas que no están bien cumplidas por personas que integran ese organismo como cualquier otro organismo del Estado no significa que se tengan que eliminar. Mañana chapamos a un ministro que está robando, entonces, hay que eliminar el Gabinete. No es así como funciona, sino lo que hay que hacer es sancionar a las personas.

Entonces, dejando estas cosas en claro, presidente, porque sabemos que este debate va a venir, lo van a llevar a medios, van a empezar a decir los cuestionados y que el Congreso de la República respalda a una entidad cuestionada, etcétera, tenemos

que ser enfáticos en defender los fueros constitucionales de las instituciones del Estado y que las conductas son las sancionables, pero no las instituciones.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Mulder.

Congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidente.

¿Cuál fue el acuerdo que se tomó en la sesión antepasada? ¿Creo que había un tema del Ministerio de Justicia? ¿Había algún tema pendiente?

El señor PRESIDENTE.— Sí, de hecho estamos a la espera de la opinión del Ministerio de Justicia. Se llamó la atención porque se habían transcurrido varias semanas y como consecuencia de esa llamada de atención es que en los últimos días el Ministerio de Justicia ha remitido su opinión favorable, ha sido incorporado dentro del dictamen y forma parte de la fórmula que se está presentando.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidente. Y otra inquietud.

En relación a la delegación de facultades otorgadas, ¿entendía que la doctora Príncipe también iba a ser invitada?

El señor PRESIDENTE.— En algún momento lo proponía como una alternativa la ministra de Justicia.

El señor PRESIDENTE.— [...?]

El señor PRESIDENTE.— No. No se ha cursado invitación.

Congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Para guardar coherencia. En las facultades delegadas hay un acápite muy específico, regular de mejor manera lo que es la procuraduría, por un lado.

Pero por otro lado, aquí estamos aprobado un dictamen que si bien no va a entrar de manera inmediata, porque es una reforma constitucional, se aplicaría a partir de marzo, abril; y es más, después de ello sobreviene lo que son las leyes orgánicas, es un proceso. Entonces, tenemos que darnos el espacio para de una manera guardar sintonía con lo que quiere el Poder Ejecutivo, porque no vaya a ser que aprobemos una norma hoy y nos esté rectificando el Poder Ejecutivo y luego nosotros podamos enmendarlo otra vez.

En consecuencia, me parece sumamente pertinente lo que dice el congresista Galarreta, de poder convocar a la procuraduría, ver por dónde va en cierta forma la perspectiva que tiene al marco regulador que va a dar con las facultades delegadas y de ahí definirlo.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Galarreta.

El señor GALARRETA VELARDE (FP).— Gracias, presidente.

En la línea del congresista Zeballos, presidente. Claro, un tema es de carácter constitucional, o sea, que va por una línea

distinta, entiendo a la delegación de facultades que van a ser normas de menor rango. Pero entiendo que esa norma de menor rango podría, y la pregunta a través suyo, presidente, es no sé si hay un plazo. Por ejemplo, en seguridad ciudadana han dicho 30 días, pero saber más o menos por dónde va la construcción de esa norma; porque si bien es cierto son dos caminos diferentes, el tema constitucional es distinto, pero sí creo entender lo que dice el congresista Zeballos es las normas que salgan nos pueden dar de alguna manera una idea si es que la reforma constitucional que tenemos que hacer, que es importante de hacerla, tiene que ir una reforma constitucional ya considerando alguno de los avances que sea en la procuraduría. Esa es la inquietud.

Sobre para tratar de despejar esa inquietud, presidente. No sé si a eso se refería el congresista Zeballos.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, usted nos ha señalado que el Ministerio de Justicia ha opinado a favorablemente sobre este proyecto. Yo le plantearía que vayamos a un cuarto intermedio de aquí hasta la siguiente sesión a efectos de poder imbuirnos del informe del Ministerio de Justicia, que evidentemente va a ser un informe madre para que después puedan presentar un proyecto de decreto legislativo si así corresponde, porque es el sector Justicia el que lo va a tener que elaborar. Y, entonces, para contabilizar un poco los criterios que por adelantado nos pudiera haber dado el ministro de Justicia sería mejor posponer este tema hasta la siguiente semana y ya tener un alcance mucho más preciso de compatibilización con lo que el Poder Ejecutivo piensa.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Vilcatoma.

La señora VILCATOMA DE LA CRUZ (FP).— Muchas gracias, señor presidente.

Las dudas que existían respecto al Ministerio de Justicia se plantearon en torno a la autonomía constitucional que debería tener o no este órgano. En ese sentido, el Ministerio de Justicia coincida con que tenga un rango de órgano constitucionalmente autónomo.

La diferencia del dictamen que usted acaba de explicarnos con la posición del Ejecutivo es que precisamente la fórmula sea presentada en una terna por el Presidente de la República y sea aprobado por el Congreso, y la diferencia que tenemos, según el dictamen que usted está proponiendo en coherencia con la propuesta de Fuerza Popular y la propuesta del Partido Aprista Peruano es que sea el Consejo Nacional el que lo pueda nombrar. Entonces, esos dos aspectos ya han sido absueltos con esta respuesta del Ministerio de Justicia. (5)

En relación a las facultades. En la misma posición se mantiene. Lo que ellos buscan a futuro también es que finalmente la Procuraduría tenga ese nivel de órgano constitucionalmente autónomo. En ese sentido no hay discrepancia ni con esta postura del Congreso ni la postura del Ejecutivo. Según el documento que

nos han enviado y según las posturas públicas que ha manifestado la señora Marisol Pérez Tello y la señora Julia Príncipe.

Lo que ellos van a necesitar a continuación de acuerdo a la delegación de facultades es la autonomía administrativa y funcional que incluso con la delegación de facultades no logra. Con la delegación de facultades lo que están logrando en este momento es darle un marco legal a la posición de la doctora Julia Príncipe como la persona que encabeza el sistema jurídico de defensa del Estado que antes recaía sobre el ministro de Justicia para poder nombrar y designar los procuradores.

Es así que los proyectos de ley que vaya a emitir el Ejecutivo en concordancia a las facultades no van a colisionar ni ahora ni en meses respecto a este dictamen que se ha dado lectura hace unos minutos, porque lo que ellos siempre van a necesitar es la autonomía administrativa y funcional, y eso únicamente se va a lograr cuando se pueda determinar que tenga el rango de órgano constitucionalmente autónomo.

Y ese punto en este momento no hay controversia, porque es la misma postura que mantenemos aquí en el Congreso y en el Ejecutivo, para aclarar en ese sentido. Incluso cuando se hizo la petición de que viniera la ministra de Justicia o la señora Príncipe tomaron la decisión incluso con votación que se reitere la petición al Ministerio de Justicia. En atención a esa duda que se generó en ese momento ya contamos con la respuesta, señor presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Vilcatoma.

Solamente una precisión. Quien ha respondido es el Ministerio de Justicia, la doctora Príncipe no se le ha sido consultado por escrito, de manera formal, por lo tanto, no ha habido una opinión respecto de ella.

Congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, yo no pongo una sola letra en duda de lo que acaba de señalar la congresista Vilcatoma. Evidentemente ella ha leído el informe del Ministerio de Justicia y yo no, y creo que algunos tampoco.

Entonces, justamente, para equilibrar criterios de análisis, que es importante leer documentos, es que reitero mi pedido de que este tema pase a un cuarto intermedio hasta la siguiente semana, que se nos procure toda la información que ha venido y después ya con un dictamen más elaborado lo volvemos a discutir.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Trujillo.

El señor TRUJILLO ZEGARRA (FP).— En el mismo sentido del congresista Mulder. Ese cuarto intermedio para poder conocer y analizar la consulta absuelta por la ministra de Justicia; pero además también considero que se invite a la doctora Julia Príncipe también para conocer, porque ella está ahorita empoderándose como la representante de las procuradurías, y sería bueno tener la información debida.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Gilbert Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias, presidente. Saludando a todos los miembros de la comisión.

Solamente una precisión. En realidad, ya considerando además la propuesta del congresista Mulder. Hay una parte de los tres proyectos de ley que se han presentado, hay una parte que dejo como interrogante para la conversación y seguro el diálogo que tendremos con la doctora Príncipe, y es... Intentamos asumir que el hecho de que lo nombre el Consejo Nacional de la Magistratura es una garantía de independencia para la futura autoridad nombrada en este caso; sin embargo, la independencia se la va a dar la Constitución.

La independencia viene porque la Constitución va a decir que el procurador o procuradora que sea nombrado para estos efectos va a tener siete años y en consecuencia su remoción, su cambio, su retiro, solo va a ser por causas debidamente justificadas bajo sanción constitucional.

Digo esto por lo siguiente, porque sí creo valdría la pena reflexionar un poco más sobre cuál podría ser la fórmula más correcta adecuada y lo dejo solo para la reflexión, insisto, de quién debe nombrar al procurador o la procuradora, y podría ser eventualmente una fórmula mixta. Yo veo que en el caso de Alianza para el Progreso la fórmula es que el defensor del Pueblo, si no me equivoco, haga la propuesta al Congreso y sea el Congreso quien lo nombre. En la otra fórmula, en el caso del partido aprista, propone que sea el Consejo Nacional de la Magistratura.

En fin, creo que ambas podrían ser perfectamente viables, pero igual es perfectamente... Yo creo que nos da el tiempo para poder analizar, porque tomo una reflexión que ha hecho el congresista Mulder. Creo que cuando se trata de reformas constitucionales y más de este tipo, que supone la arquitectura constitucional, creo que deberíamos ser lo menos reactivo posible. Y creo que nos deberíamos darnos un tiempo para poder tener una reflexión con algo más de profundidad.

Creo que todos queremos luchar contra la corrupción, todos queremos tener un procurador que tenga independencia, autonomía y protección constitucional, pero creo que lo que no podemos es en nuestro deseo de poder tener una respuesta pasemos de reactivos a tener algo de improvisación en el tema.

Solamente como una reflexión, creo que todos estamos apoyando la propuesta en general y lo dejo en todo caso para que eso sea parte de la conversación que tendremos con la doctora Príncipe.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Quintanilla.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente, yo creo que debe quedar una cosa clara, la necesidad de dotarle a la Procuraduría General de la República la autonomía constitucional necesaria.

En la propuesta que inicialmente no sé quién la manifestó en el sentido de que esperemos que pasen los 90 días que haga uso para ver cómo se... Yo creo que eso es un error. El congresista Mulder dice una semana para poder evaluar y estudiar, estoy de acuerdo, pero que quede el compromiso de que nosotros como comisión tenemos que procurar que esto se resuelva en la presente legislatura para no postergar a las calendas griegas esta modificación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Queda claro, congresista Quintanilla.

De hecho y se señala para que quede en actas, es una prioridad para esta comisión este proyecto de ley, en el sentido de que existe diversas posiciones de distintas bancadas que han incidido en la importancia de este proyecto.

Si es que no existe intervención adicional. Entiendo que lo que pasaríamos a votar a continuación es que dejemos este tema en agenda para la próxima semana en donde solicitemos además la presencia de la doctora Julia Príncipe.

Entonces, los que estén a favor. Vamos a pasar a votación nominal.

Congresistas: Lescano, Quintanilla (a favor), Zeballos, Violeta, Castro, Trujillo, Torres (a favor), Canzio (a favor), Donayre, Bartra, Takayama, Alcorta, Galarreta, Becerril (a favor), Vilcatoma, Mulder (a favor). Ha sido aprobado por unanimidad.

Siguiente tema, 5.7. Propuesta de dictamen recaído por el Proyecto de Ley 10-2016, que propone modificar el artículo 16.º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que regula la vacancia de los magistrados del referido organismo autónomo. Esta iniciativa pretende la modificación del artículo 16.º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el sentido que el referido organismo constitucional autónomo en concreto mediante el voto de cuatro de sus miembros ya no sea el competente para declarar la vacancia de los magistrados por los causales de incapacidad moral o física permanente, culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo, violar la reserva propia de la función en contabilidad sobreviniente, sino más bien el Congreso de la República a través de los procedimientos de acusación constitucional.

Como sustento señala que resulta incoherente y contrario al principio de proporcionalidad que sea el Congreso quien luego de un procedimiento extenso y por el voto de los dos tercios de sus miembros elijan a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero con cuatro votos de dicho magistrado se pueda dejar sin efecto dicha elección y se declare la vacancia de un magistrado del referido organismo constitucional autónomo.

Sin embargo, no se puede confundir lo que representa la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a cargo del Congreso de la República del propio funcionamiento y ejercicio de las competencias atribuidas directamente por el poder constituyente por el Tribunal Constitucional.

El solo hecho de que el Congreso de la República elija a los magistrados del Tribunal Constitucional no constituye un argumento suficiente para justificar una competencia exclusiva y no reconocida expresamente en la Constitución Política al Congreso de la República para declarar la vacancia de sus miembros, máxime, si el poder constituyente le otorgó autonomía e independencia del Tribunal Constitucional. También la iniciativa considera que el Tribunal Constitucional con la regulación vigente se irroga atribuciones que le corresponde en el Congreso de la República.

Al respecto, es preciso recordar que el antejudio político procede ante la comisión de conductas delictivas que para la procedencia de la destitución deben requerir necesariamente de un pronunciamiento judicial, mientras que el juicio político procede, valga la redundancia, ante faltas de naturaleza política. Por su parte, las causales de vacancias aludidas en el proyecto de ley inciden más en una falta de naturaleza administrativa o ética.

Además cabe resaltar que el hecho de que el Tribunal Constitucional tenga competencia para declarar la vacancia de sus miembros por causales previamente establecidas en su ley orgánica no enerva ni elimina la competencia constitucional del Congreso de la República de tramitar los procedimientos de acusación constitucional que en el marco de su autonomía puede iniciar, incluso con posterioridad al cese del cargo del magistrado del Tribunal Constitucional.

La exposición de motivos también alega que la propuesta legislativa constituye una manifestación o expresión del sistema de pesos y contrapesos y que no afecta la autonomía constitucional del Tribunal constitucional; sin embargo, es preciso señalar que la expresión del sistema de pesos y contrapesos lo constituyen los procedimientos de acusación constitucional regulados ya en la Constitución Política siendo que la legislación vigente no impide al Congreso de la República recurrir a ellos de ser el caso.

Suprimir la competencia al Tribunal Constitucional de definir los asuntos propios de su organización y la salvaguarda de su institucional supondría más bien una afectación en su autonomía constitucional, la cual supone precisamente capacidad para autorregularse y decidir sobre organización internamente.

Debemos recordar que el Tribunal Constitucional ejerce función jurisdiccional en materia constitucional y en ese sentido se dirige en interprete definitivo de la Constitución Política, por lo que debe evitarse adoptar medidas, sea a través de normas o a través de procedimientos como los de acusación constitucional, que incidan o afectan su autonomía independencia e imparcialidad, principios indispensables para el adecuado ejercicio de dicha función.

Entonces, el que sea el Congreso de la República el único que defina no solo la elección sino también la vacancia de los miembros del Tribunal Constitucional, lejos de reafirmar la autonomía e institucionalidad del referido organismo

constitucional autónomo generaría una percepción negativa de dependencia, cuando precisamente el sistema de pesos y contrapesos al que se alude en el proyecto de ley requiere instituciones autónomas fuertes, más aún si es que el Tribunal Constitucional tiene entre sus competencias evaluar la constitucionalidad de las leyes que emite este poder del Estado.

Respecto de la argumentación que la regulación vigente lesiona, el principio de imparcialidad porque los magistrados decidirían la vacancia de sus propios miembros es preciso señalar que en tanto se trata de una falta de carácter administrativo o ético más allá de sus vínculo abstracto con el ejercicio de la función el principio de imparcialidad no puede ser optimizado o interpretado en la misma medida, ostensión que se exige para la función jurisdiccional.

Aceptar la propuesta legislativa supondría negar en sí misma la capacidad de autorganización y la propia autonomía de los organismos constitucionales, incluso supondría que cualquier entidad en aras del principio de imparcialidad, tal como es entendido en la exposición de motivos, no podría imponer sanciones algunas a sus integrantes o pares por afectar dicho principio. Así la salvaguarda de dicho principio no pasa por una regla de previsión, sino más bien por una exigencia de motivación de la decisión que establece la vacancia o no de un magistrado del Tribunal Constitucional.

De otro lado, cabe indicar que nuestro ordenamiento jurídico existe en otros organismos constitucionales con autonomía constitucional directa cuya vacancia la deciden los propios pares o miembros. Así a nivel regional la vacancia de un consejero es declarada en instancia administrativa por el consejo regional, el cual está integrado, valga la redundancia, por los consejos regionales. A nivel local, la vacancia del alcalde o regidor es declarada en instancia administrativa por el consejo municipal, el cual está integrado precisamente por el alcalde y los regidores.

En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que también ejerce función jurisdiccional como el Tribunal Constitucional solo que en materia electoral, la vacancia también es declarada por los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ello por tanto no es inconstitucional, sino más bien expresión de la autonomía otorgada por el poder constituyente en la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto y acogiendo además lo señalado en la opinión técnica alcanzada por el Ministerio de Justicia y contenida en el informe legal 085-2016 de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico se propone la no aprobación y archivo del proyecto de ley 010.

Alguna opinión de los señores congresistas.

Se da la bienvenida al congresista Justiniano Apaza, quien solicita la palabra.

Congresista.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Gracias, señor presidente.

Colegas parlamentarios una vez más tengo que lamentar que la opinión de la comisión técnica no es acorde a la realidad. (6)

En efecto señor presidente, el proyecto de ley que tiene por finalidad más que todo eliminar la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de destituir a uno de sus miembros consideramos que esta facultad es, reitero inconstitucional, porque de acuerdo con la Constitución el único facultado para destituir a los miembros del TC, es el Congreso mediante un proceso de acusación constitucional.

Esto bajo un principio de derecho que saben casi todos los abogados que todo se deshace conforme se hace.

Entonces esta iniciativa señor presidente, defiende pues el fuero Parlamentario, en cuanto a uno de sus competencias que regula la Constitución artículo 99.º, no es válido para una Ley Orgánica, porque una cuestión jerárquica es superior, que es más que todo inferior a la Constitución.

En efecto el artículo 16.º, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, señor presidente, establece causales de vacancia de destitución, que se aprueba con mayoría simple, es decir con cuatro votos, lo que es desproporcionado con la acusación constitucional, donde se requiere 66 votos, entendiendo que la Comisión de Acusaciones Constitucionales no vota.

Hace un momento he escuchado la fundamentación de la Comisión Técnica, de que se compara con el Tribunal Constitucional, con los Consejos Provinciales, etcétera, nosotros consideramos que en este caso pues, aquí que el acusa también tiene derecho a votar y esto lo consideramos que no es justo, ni es proporcional.

En ese sentido, entonces este proyecto creemos señor, no atribuye ninguna competencia nueva al Congreso, pues hoy por todas estas causales se puede interponer una acusación constitucional donde se exige que infringe la Constitución o sea, comete un delito.

Por otra parte señor, tenemos que señalar de que se ha pedido, la comisión ha pedido un informe a tres instancias, el Poder Judicial que no se pronuncie, reitero no se pronuncie; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sí se ha pronunciado.

Sin embargo, también se ha pedido al Colegio de Abogados del cual no se pronuncie, sin embargo, el que se pronuncia como digo el Ministerio de Justicia, dice en uno de sus párrafos, señor dice: no obstante recomendamos que se revise las causales de vacancia establecidos en la ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entiende de forma que se establezca causales objetivas de forma que no se vea afectada la independencia de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Al respecto es preciso mencionar que en el informe antes mencionado respecto a la fórmula legal actualmente vigente que determina que sea el propio Tribunal Constitucional quién defina la vacancia de sus miembros, se indica que supone una saludable línea de defensa ante cualquier posible exceso, reitero exceso y

extralimitación de parte de cualquier otro poder del Estado; que significa esto de que...

Con todo gusto si lo permite señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias presidente.

Quiero entender el tema, la propuesta, o sea, quién nombra al Tribunal es el Congreso, y quién lo destituye es el Congreso...

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Es el Congreso, deber ser.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Ya, y la propuesta que usted está aclarando es por que...

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Nosotros es referente a que el propio Tribunal pueda sancionar y vacar a uno de sus miembros como el caso último de la doctora Ledesma eso es lo que queremos fundamentar mediante esta modificación...

El señor PRESIDENTE.— Congresista Apaza solamente para hacer una precisión, no es que el Congreso deje de tener la posibilidad de destituir a un miembro del Tribunal, lo sigue manteniendo.

La propuesta del congresista Apaza, es de que el Tribunal Constitucional, ellos mismos no puedan declarar la vacancia, acá no está, me parece congresista Apaza y solamente con el ánimo de aclarar que acá no está en cuestión lo que pueda o no pueda hacer el Congreso, porque el Congreso sigue teniendo el antejuicio, el juicio político y todo, dice acá, facultad de sacarlo, acá el análisis entendemos que se ha hecho es que sea el propio Tribunal Constitucional que mantenga o no, la facultad de declarar la vacancia de sus miembros o no, es correcto.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Claro, lo que nosotros con ese proyecto estamos sosteniendo de que el Tribunal no pueda tener esa facultad de vacar porque se presentan accesos y en muchas veces el que acusa vota, entonces viene a ser juez y parte, por eso es que nosotros consideramos que la modificación del artículo 6.º, debe ser aprobada para que haya equidad.

Entonces, para terminar colegas Parlamentarios, no se puede dictaminar señalando que no se infringe el principio más que todo de imparcialidad, son argumentos de repente sofistas porque quieren convertir en sólidos y fuertes argumentos totalmente débiles.

Entonces, solicito incluso de que con la opinión solamente de uno de los tres, no se puede dictaminar el archivo, esto tiene que ser debatible o debatido.

Por lo tanto, pido que se pida por ejemplo, una opinión de la Defensoría del Pueblo y se reitere al Ministerio de Justicia para que se pronuncie positivo o negativamente.

Por lo tanto creemos de que esto no puede ser archivado, señor presidente y colegas Parlamentarios así por así, solo teniendo de repente una opinión, tenemos entendido del doctor Borea, no solamente Borea puede ser el único sabio, hay bastantes

entendidos y bastantes constitucionalistas que también podemos pedir una opinión.

Por lo tanto solicito, de que se haga esta instancia, colegas invoco para que en forma democrática veamos de que no se politice también algunas decisiones fundamentalmente en el Tribunal Constitucional, lo que constante y perennemente a través de los años se ha visto intereses de por medio de acuerdo al gobierno que se tiene, no olvidemos de que si nosotros hacemos una retrospectiva al tiempo habido varios defectos y efectos de parte del Tribunal Constitucional.

Es una invocación que les hacemos para que se pueda debatir un poco este problema y no simplemente dictaminar al archivo que por segunda vez ya lo ha hecho la Comisión Técnica, no comprendo los intereses que tenga.

Gracias señor.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Alcorta.

Congresista Zevallos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Gracias.

Presidente, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho y me informa por secretaría técnica que el congresista Justiniano Apaza, no ha sido citado oportunamente para sustentar su proyecto ante esta Comisión.

Acabamos de escuchar algunos Parlamentarios que han justificado y explicado en caso del derecho al agua su proyecto de ley, en el caso presidente, es algo irregular, usted presenta el dictamen y posteriormente el dictamen se le pide su parecer a quién es autor del proyecto, o sea, por un mínimo de ponderación yo sugiero que el dictamen sea pospuesto para solidarización y es más nos da la ocasión de regular la presentación del autor del proyecto y a su vez también mejor informarnos...

El señor PRESIDENTE.— Discúlpeme congresista Zevallos, para no dejar ningún atisbo de tratamiento diferenciado, permítanme decirles de que cuando se da la oportunidad de que expongan sus proyectos, es como ocasión de que algún congresista ha manifestado su interés en hacerlo, es decir por ejemplo, en el caso del congresista Yonhy Lescano manifestó su interés en exponer su proyecto y eso decantó en que todos los congresistas que tenían un proyecto relacionado al tema lo hagan.

Igualito sucedió con la congresista Vilcatoma, cuando manifiestan su interés es que nosotros encantados de recibirlos salvo que se me haya pasado congresista Apaza y no haya reparado entiendo que no solicitó el congresista, solamente lo aclaro a efectos -un segundito congresista Apaza- solamente lo aclaro a efectos de que no se piense de manera equivocada que estamos dando tratamiento distinto si lo solicitan en hora buena, no creo que hay ningún problema.

Congresista Zevallos, para que termine.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Una interrupción me permite.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Le doy enseguida.

No solamente para precisarle, las circunstancias que esté presente el congresista Justiniano Apaza, evidencia su interés en su proyecto de ley, y que autor de un proyecto de ley, no va estar interesado en que se lo apruebe oportunamente en este caso está más que justificado, sino que me parece extraño que antes se explique un autor de un proyecto y no haya un dictamen, en este caso que funciona al revés, no dudo de su imparcialidad presidente, sino que simplemente pretendo ordenar cuál es el procedimiento que debe ser al interior de cada comisión.

Gracias.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Un aclaración señor...

El señor PRESIDENTE.— Un segundito congresista Apaza, para que le dé el uso de la palabra.

Solamente precisar de que la invitación a que vengan a exponer los proyectos de ley, vamos a seguir manejándolo bajo la misma lógica que es cuando manifiesta un interés en hacerlo, porque no pretendemos que los 80 proyectos de ley que tenemos ahorita en la comisión, vengan a exponer cada uno de los congresistas su proyecto, sino simplemente no terminaríamos.

Entonces reitero, congresista Zevallos de que estamos actuando de manera equitativa con todos, si el congresista Apaza tendría en su momento interés de sustentarlo encantado de la vida.

Congresista...

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Para terminar usted, me ha interrumpido.

No es que este es un caso que aparentemente lo estamos tomando como superficial y es más profundo presidente -déjeme terminar-

Acá de por medio hay un fallo que ve el Tribunal Constitucional respecto a una universidad y sobre un proyecto de ley que lo trabajamos en esta comisión y usted voto a favor, hace cuatro años atrás y lamentablemente el Tribunal Constitucional, con una extraña mayoría lo ha rectificado o sea, ha enmendado al Parlamento y esto generó un contencioso casi personal entre cinco Magistrados y la Magistrada Ledesma, que llevaron inclusive a cierto improperios escritos en el propio fallo judicial.

Y esto propició dos acciones, la primera que la señora Ledesma, está sujeta a un supuesto proceso administrativo disciplinario al interior del Tribunal y la segunda que el grupo de Magistrados la denuncian a ella ante el Tribunal, entonces es un tema que debe zanjarse porque de por medio está un pilar de la *constitucionalidad en este país es el Tribunal Constitucional.

Entonces a efecto de ello presidente, yo sugiero que este tema no sea votado ahora, que lo pospongamos una semana.

Gracias presidente.

El señor PRESIDENTE.— Está presentando entonces una cuestión previa, para que quede en la grabación.

Congresista Zevallos.

El señor ZEBALLOS SALINAS (PPK).— Sí.

El señor PRESIDENTE.— Está presentado una cuestión previa.

Antes del congresista Castro, había pedido la palabra el congresista Apaza.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Sí, gracias por el apoyo.

Realmente este es un caso muy delicado tiene un profundo significado dentro de la constitucionalidad del país, no lo veamos simplemente por se puede o no se puede, una decisión de un consejo provincial, una votación en un gobierno regional, no tiene de repente tanta trascendencia en el significado de eso, tenemos que entender de que hay pues juegos de intereses lo más importante es de que no hay equidad de cinco, que uno vote a favor y que sea el mismo acusador.

Entonces, creemos señor presidente, de que esta instancia tiene que ser concientizada y no solamente por un dictamen y de acuerdo a la tradicionalidad y la costumbre del Parlamento aquí están varios colegas que son reelectos de repente yo estoy la cuarta vez y lo que se practica es invitar cuando hay duda, cuando un proyecto tiene duda o es difícil poder dictaminar, siempre se ha invitado por norma, al ponente y al que propone un proyecto.

Lamentablemente aquí se ha mandado, se quiere mandar al archivo sin escuchar por qué, fundamentan y creemos de que esto tiene que superarse, es una tradición en el Parlamento, en el fuero Parlamentario y dentro de la Hermenéutica Parlamentaria... Sí, el colega mi pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Violeta.

El señor VIOLETA LÓPEZ (PPK).— Gracias congresista Apaza, gracias presidente.

Creo que en línea un poco con el precedente del dictamen anterior si vamos a tomarnos una semana más para poder analizar este dictamen, solicitaría aunándome además al pedido de mi colega de bancada que aprovechemos para traer a un especialista más que de repente nos dé un poquito más de luces sobre los antecedentes de este caso, porque si no tengo un poco la impresión que vamos a llegar un poco a repetir un poco la misma discusión presidente.

Solamente eso, gracias congresista.

El señor APAZA ORDÓÑEZ (FA).— Para terminar.

Agradezco la opinión y estoy de acuerdo con lo que plantean los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra y desde ya mi profundo agradecimiento a mi colega, a mi camarada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias congresista Apaza.

Atendiendo, si me permite, atendiendo la cuestión previa, la solidaridad expresada por distintos miembros, les proponemos lo siguiente congresista Apaza, enviemos por lo menos a tres miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución,

ya hemos escuchado los argumentos que usted tiene y por lo menos démonos dependiendo si llegan o no llegan estas resoluciones una o dos semanas para poder pasar a modificación del dictamen y a votación.

Los que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Señor presidente estaba pidiendo la palabra, pero en fin.

El señor PRESIDENTE.— Pero para resumir, salvo que quiera congresista Quintanilla.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (FA).— Gracias compañera y camarada Alcorta, es la que pone la sazón en la comisión.

Bueno, yo solo quería agregar no más que tenemos que tener cuidado porque siendo un órgano de rango constitucional, el Tribunal Constitucional, tenemos que protegerlo para que no vaya a crearse digamos una crisis a su interior, o sea, si son un número reducido de miembros y ellos pueden (7) destituir a uno de sus miembros le da cierta inestabilidad a esa institución. Por eso es conveniente en el proyecto del congresista Justiniano Apaza que sea el Congreso el que se pronuncie cuando hay una crisis de ese tipo.

Entonces, yo estoy de acuerdo con Justiniano Apaza y estoy en desacuerdo con la propuesta, por eso estoy de acuerdo que se reevalúe para poder modificar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Muy bien vamos a pasar a votación entonces, la votación para que quede claro en Actas, es para que se solicite la opinión de tres miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y esperemos la respuesta de esos miembros consultivos por una o dos semanas máximo y luego de tener estas opiniones incorporadas evidentemente el dictamen, de proceda a su debate y a su votación.

Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano.

Por unanimidad.

Muy bien, habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión si esperar el trámite de aprobación del Acta.

Los que estén a favor.

Por unanimidad.

La dispensa ha sido aprobada por unanimidad, le levanta la sesión siendo las 11 con 15 minutos.

Muchas gracias.

—A las 11:15 h, se levanta la sesión.